

Valdivia, siete de mayo de dos mil veintiuno.

Vistos:

Que en estos antecedentes RUC 1900853211-k, que corresponden a la causa RIT 42– 2020 del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, ingresada en esta Corte con el ROL N°40 – 2021, se han interpuesto recursos de nulidad por las defensas de los imputados en los siguientes términos:

I.- CARLOS ARTURO ALVAREZ REZA, representado por el abogado defensor particular Roberto Cuevas Monje, basado como causal principal en la contemplada en el artículo 374 e) en relación con los artículos 342 c) y 297, todos del Código Procesal Penal, alegando por esta vía : a) Infracción al artículo 19 letra A) de la Ley 20.000. y b) Infracción al artículo 11 N°9 del Código Penal.

Como causal subsidiaria, invoca la contemplada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, por errónea aplicación del artículo 19 letra A) de la ley 20.000.-

II.- ADLAY DAVID QUIÑONES CASTRO e ISRAEL HERNÁN RIVAS ASPIRILLA, ambos representados por el defensor penal público Matías Cartes Díaz.

Funda su recurso, en cinco causales, una como principal y las otras cuatro como subsidiarias, a saber:

a) Como causal principal en la contemplada en el artículo 373 letra a) infracción garantías imparcialidad del juzgador, en razón de lo dispuesto en el artículo 1 del Código Procesal Penal y artículo 19 N°3 de la Constitución Política del Estado.

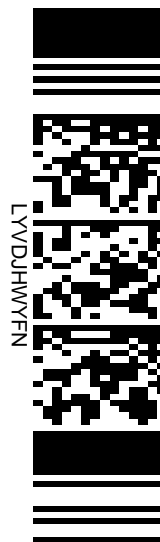
b) Primera causal subsidiaria, fundada en la establecida en el artículo 374 letra f) del Código Procesal Penal, por infracción al artículo 341 del mismo texto legal.

c) Segunda causal subsidiaria, basada en la contemplada en el artículo 374 e) en relación a los artículos 342 letra c) y 297, todos del Código Procesal Penal.

d) Tercera causal subsidiaria, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, en relación al artículo 1° de la Ley 20.000, artículo 63 del Código Penal y artículo 351 del Código Procesal Penal.

e) Cuarta causal subsidiaria, contemplada en el artículo 373 letra b) por infracción al artículo 19 letra a) de la Ley 20.000.- en relación al artículo 63 del Código Penal.

III.- HANNER FIGUEROA GUENGUE, representado por el defensor particular César Garnica González.



Funda su recurso en la causal única contemplada en el artículo 374 e) en relación al artículo 342 letra c) y 297, todos del Código Procesal Penal.

IV.- RECURSO JENNIFER ESTHER SALAZAR, representada por el defensor penal público, Gerardo Norambuena Álvarez.

Funda su recurso en las siguientes causales.

a) Causal contemplada en el artículo 374 letra a) en relación al artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales.

b) Causal subsidiaria basada en el artículo 374 letra e) en relación al artículo 342 letra c) y 297, todos del Código Procesal Penal.

c) Causal subsidiaria contemplada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, en relación al artículo 19 letra a) de la ley 20.000.- al artículo 11 N°9 del Código Penal y al no aplicar inciso final de artículo 49 del Código Penal. Todo lo anterior en relación al artículo 3 de la ley 20.000.- y artículo 68 del Código Penal.

V.- EDITH NICAULYS SANTANA ARIAS DE SOSA y JONATHAN ANGULO VENTE, representados por la defensora penal pública MARLIS SAGNER TAPIA, quien fundamenta su presentación con las siguientes causales:

1.- Causal Principal: 374 a) del Código Procesal Penal.

2.- Causa subsidiaria 374 letra e) en relación a los artículos 342 letra c) y 297, todos del Código Procesal Penal.

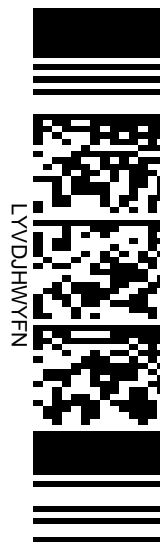
3.-Causal Subsidiaria 373 letra b) en relación al artículo 11 N° 9 del Código Penal.

Los recursos se interpusieron en contra de la sentencia de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, rectificada con fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte que resolvió lo siguiente:

a.- Que se absuelve al acusado ISMAEL DE LA ROSA.

b.- Condena a YEFFERSON ANDRES RIASCOS RENGIFO, en calidad de autor, del delito de tráfico ilícito de drogas, previsto y sancionado en el artículo 3° en relación al artículo 1° de la ley 20000, en grado consumado, cometido el día 09 de diciembre de 2019, a la pena de DIEZ AÑOS Y UN DÍA de presidio mayor en su grado medio, multa de 40 UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES y accesorias legales.

c.- Condena a HANNER ANDRES FIGUEROA GUENGUE, como autor de los delitos de tráfico ilícito de drogas, previsto y sancionado en el artículo 3° en relación al artículo 1° de la ley 20000, en grado consumados, cometidos los días 09 de abril de 2019, 27 de junio de 2019 y el día 08 de julio de 2019, a la pena de



DIECIOCHO AÑOS de PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÁXIMO, multa de 120 UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES y accesorias legales.

d.- Condena a EDITH NICAULYS SANTANA ARIAS DE SOSA, como autora del delito de tráfico ilícito de drogas, previsto y sancionado en el artículo 3° en relación al artículo 1° de la ley 20000, en grado consumado, cometido el día 07 de diciembre de 2019, a la pena de CINCO AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO, multa de 40 UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES y accesorias legales.

e.- Condena a MARINA FERNANDA MATURANA MARTÍNEZ, como autora de los delitos de tráfico ilícito de drogas previsto y sancionado en el artículo 3° en relación al artículo 1° de la ley 20000, en grado consumados, cometidos el día 27 de junio de 2019 y 08 de julio de 2019, a la pena de CINCO AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO, multa de 80 UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES y accesorias legales.

f.- Condena a JONATHAN ANGULO VENTE, en calidad de autor, del delito de tráfico ilícito de drogas previsto y sancionado en el artículo 3° en relación al artículo 1° de la ley 20000, en grado consumado, cometido el día 07 de diciembre de 2019, a la pena de CINCO AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MINIMO, multa de 40 UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES y accesorias legales.

g.- Condena a JENNIFER ESTHER SALAZAR, como autora del delito de tráfico ilícito de drogas, previsto y sancionado en el artículo 3° en relación al artículo 1° de la ley 20000, en grado consumado, cometido el día 07 de diciembre de 2019, a la pena de DIEZ AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO, multa de 40 UNIDADES TRIBUTARIAS y accesorias legales.

h.- Condena a CARLOS ARTURO ALVAREZ REZA, en calidad de autor, del delito de tráfico ilícito de drogas, de conformidad al artículo 3° en relación al artículo 1° de la ley 20000, en grado consumado, cometido el día 11 de septiembre de 2019, a la pena de DIEZ AÑOS Y UN DÍA de PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO, multa de 40 UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES y accesorias legales.

i.- Condena a ADLAY DAVID QUIÑONES CASTRO, en calidad de autor, de los delitos de tráfico ilícito de drogas, previsto y sancionado en el artículo 3° en relación al artículo 1° de la ley 20000, en grado consumados, cometidos el día 08 de julio de 2019, 11 de septiembre de 2019, y 09 de diciembre de 2019, a la pena única de QUINCE AÑOS Y UN DÍA de PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO



MAXIMO, multa de 120 UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES y accesorias legales.

j.- Condena a ISRAEL HERNAN RIVAS ASPRILLA, en calidad de autor, de los delitos de tráfico ilícito de drogas, previsto y sancionado en el artículo 3° en relación al artículo 1° de la ley 20.000, en grado consumados, cometidos el día 11 de septiembre de 2019, 07 de diciembre de 2019, y 09 de diciembre de 2019, a la pena única de QUINCE AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÁXIMO, multa de 120 UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES y accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Considerando:

I.-En cuanto a la causal de nulidad interpuesta por Carlos Álvarez Reza.

1.- Que la defensa del acusado ha recurrido, alegando como causal principal, la contemplada en el artículo 342 letra e) en relación a los artículos 342 letra c) y 297, todos del Código Procesal Penal, indicando que el Tribunal Oral en lo Penal efectuó una valoración errónea o parcial de la prueba rendida en juicio, vulnerando los principios de la lógica, máximas de la experiencia y conocimientos científicamente afianzados; así como tampoco consideró las razones legales y los argumentos doctrinales expuestos en el juicio como para aplicar dentro de la sentencia la circunstancia de determinación de pena del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000.

2°.- Que resulta necesario tener presente cuales fueron los hechos que se tuvieron por acreditados según el fallo recurrido, los que según consta en el considerando veinticinco del mismo, son los siguientes: siguientes hechos:

Hecho número1:

El día 9 de Abril de 2019, alrededor de las 06. 00 horas, la policía de investigaciones procedió a allanar el domicilio ubicado en la ciudad de Osorno, calle Copahue 1929, encontrando en su interior al imputado HANNER ANDRES FIGUEROA GUENGUE, quien mantenía en el dormitorio en el que pernoctaba una caja contenedora de 324 gramos bruto de cannabis o marihuana (nue5945473), sin contar con las competentes autorizaciones.

Hecho número 2:

Mediante interceptaciones telefónicas y otras técnicas de investigación realizadas se pudo establecer que el imputado HANNER ANDRÉS FIGUEROA GUENGUE alias Martin, quien se encontraba en prisión preventiva en el Centro de



Cumplimiento Penitenciario de Osorno, entregaba instrucciones a MARINA FERNANDA MATURANA MARTINEZ, alias la Peli o Pelu, a través de llamadas, mensajería, whasapps y redes sociales, de cómo proceder en la recepción, guarda, entrega, y transporte de la droga en la ciudad de Osorno y Puerto Montt (cocaína, marihuana, fármacos y MDMA). Para el traslado de tal droga dentro de la ciudad de Osorno, en el mes de junio de 2019, y desde Puerto Montt a Osorno, en el mes de julio de 2019, la imputada MARINA FERNANDA MATURANA MARTINEZ utilizó el vehículo placa patente única HSDT 74 de color blanco.

El día 27 Junio de 2019, MARINA FERNANDA MATURANA MARTINEZ, siguiendo las instrucciones de HANNER ANDRES FIGUEROA GUENGUE, suministró a una persona no identificada, 10 gramos de marihuana (nue5015486), 14 gramos de cocaína clorhidrato (nue5015487), 10 comprimidos de clonazepam (nue5015489), 11 comprimidos de clonazepam (nue5015488) y dos comprimidos de MDMA (nue5015490) sin contar con las autorizaciones competentes, la que fue ingresada al Centro de Cumplimiento Penitenciario de la ciudad de Osorno, droga que Marina Maturana Martínez recibió de Adlay Quiñones Castro y de Carlos Álvarez Reza.

Hecho número 3:

El día lunes 8 de julio de 2019, alrededor de las 13.15 horas la imputada MARINA FERNANDA MATURANA MARTINEZ fue sorprendida por funcionarios de carabineros manteniendo guardado al interior de la vivienda ubicada en la ciudad de Osorno, calle Arturo Prat 302, la cantidad de 2 kilos 31 gramos brutos de cocaína distribuidos en un paquete con 25 ovoides con un peso bruto de 291 gramos (nue2898439), un paquete con 34 ovoides con un peso bruto de 387 gramos (nue2898440), un paquete con 39 ovoides con un peso bruto de 446 gramos (nue2898441), un paquete con 40 ovoides con un peso bruto de 456 gramos (nue2898442), un paquete con 40 ovoides con un peso bruto de 449 gramos (nue2898443) y 11.5 gramos brutos de cannabis (nue2898436), además de \$2.849.000 pesos. Droga que la imputada MARINA FERNANDA MATURANA MARTINEZ había ido buscar a la ciudad de Puerto Montt, a bordo del vehículo placa patente única HSDT 74, siguiendo las instrucciones acordadas con HANNER ANDRES FIGUEROA GUENGUE conjuntamente con ADLAY DAVID QUIÑONES CASTRO. La guarda de la droga era sin contar con las autorizaciones competentes.

La participación que tuvo tanto Hanner Figueroa Guengue como Marina Maturana y Adlay Quiñones Castro en los hechos referidos en el número 2 y 3, fue conforme al art. 15 N°1 del Código Penal, y consistió en una intervención directa e



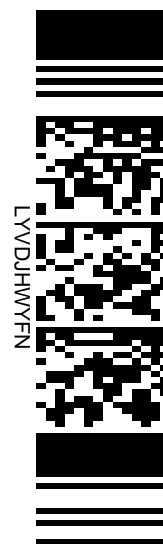
inmediata, desde que Hanner Figueroa entrega las instrucciones y datos precisos para que Marina consiga la droga, la reciba de sus proveedores, guarde, traslade, entregue y comercialice, manteniendo éste siempre un control directo sobre la operación de tráfico de drogas, realizando Marina, por su parte, todas las acciones, gestiones, etc, indicadas por Hanner y necesarias para que se consuma el delito de tráfico ilícito de drogas, de tal forma que las decisiones que Hanner tomaba eran determinantes para que el delito se concretara; tanto es así, que sin las instrucciones, contactos, y datos entregados por Hanner Figueroa, Marina Maturana no hubiera podido sola realizar la recepción de las remesas de droga, la guarda de la misma, las entregas de la droga, venta, depósitos o traslados de la misma, etc. ; por otra parte, Adlay Quiñones Castro interviene de manera directa e inmediata en los hechos numero 3 al trasladar la droga desde Santiago hasta Puerto Montt, en coordinación con los otros autores, concretando la entrega de la droga en dicha ciudad a Marina Maturana Martínez, la que finalmente es encontrada en poder de Marina, dentro de su domicilio, participación conforme al art. 15 N°1 del Código Penal.

Hecho número 4:

Asimismo, el imputado CARLOS ARTURO ALVAREZ REZA, el día 11 de Septiembre de 2019, alrededor de las 10.20 horas, en la ruta 5, a la altura del kilómetro 897 de la comuna de San Pablo fue sorprendido por funcionarios de carabineros transportando a bordo de un bus interprovincial la cantidad de 5 kilos 660 gramos de cocaína clorhidrato (nue 1866679, 1866678) sin contar con las competentes autorizaciones. Tal droga le fue entregada a Carlos Álvarez Reza por Adlay Quiñones Castro siguiendo las instrucciones de Israel Rivas Asprilla, y dándole cuenta a éste.

Hecho número 5:

El día 07 de diciembre de 2019, alrededor de las 13:00 horas, en los alrededores del sector de Angelmó de la ciudad de Puerto Montt, la policía sorprendió a bordo del barco Evangelista a EDITH NICAULYS SANTANA ARIAS DE SOSA transportando la cantidad de 1 kilo 27 gramos de cocaína clorhidrato, en tres contenedores distintos (nue5765509 y nue5765506) y \$22.000 pesos en dinero en efectivo, y también a bordo de dicha nave sorprendieron a JONATAN ANGULO VENTE quien transportaba 5 kilos 829 gramos de marihuana tipo cripy, distribuidos en 6 contenedores distintos (nue5765515) y \$115.780 pesos en dinero en efectivo; encontrándose además a bordo de dicho barco con destino al sur, a JENNIFER ESTHER SALAZAR, quien mantenía en su poder un teléfono utilizado para recibir las instrucciones de Israel Rivas Asprilla alias Chepe, instrucciones



relativas al transporte de la droga que realizaban EDITH NICAULYS SANTANA ARIAS DE SOSA y JONATAN ANGULO VENTE hacia el sur (Puerto Natales y Punta Arenas), además de \$65.000 pesos en dinero en efectivo. El transporte de la droga era sin contar con las autorizaciones competentes.

Hecho número 6:

El día 09 de Diciembre de 2019, en horas de la mañana, funcionarios de carabineros, llegaron hasta el lugar de trabajo del imputado ADLAY DAVID QUIÑONES CASTRO ubicado en el supermercado Líder, del sector de Los Dominicos, camino el Alba 11865 de la comuna de las Condes y en su locker asignado se encontró que el imputado guardaba 5 bolsas de nylon contenedoras de cocaína clorhidrato con un peso de 3, 6 gramos (nue5805606) y \$101.250 pesos; y en su domicilio particular ubicado en la comuna de Estación Central, calle Padre Alberto Hurtado 159, block 1, departamento 416 de la Villa Portales, el imputado guardaba, al interior de una maleta, 6 envoltorios tipo ovoide contenedores de 60 gramos de cocaína clorhidrato (nue5805590), un rollo de bolsas de nylon dosificadoras.

Momentos después, alrededor de las 12.10 horas del día 09 de diciembre de 2019, los carabineros procedieron a ingresar al domicilio ubicado en la comuna de Estación Central, calle Arica 4107, lugar donde se encontraba YEFFERSON ANDRES RIASCOS RENGIFO, manteniendo guardado en su poder en dicho lugar: 6 paquetes envueltos en papel aluza contenedora de 200 ovoides de cocaína clorhidrato (nue1866719) con un peso de 2.282 gramos, una bolsa y un ovoide ambos contenedores de un total de 15 gramos (nue1866720) de cocaína clorhidrato, 1 paquete contenedor de 1.267 gramos de marihuana o cannabis (nue1866721) y otras sustancias destinadas para abultarla (cafeína y lidocaína) además de dispositivos y herramientas para la confección de ovoides, dinero en efectivo y teléfonos celulares., lugar de acopio de la droga al que accedió el imputado Riascos por instrucciones dadas por ISRAEL HERNAN RIVAS ASPRILLA, sin contar con las competentes autorizaciones.

Todas estas maniobras, esto es, la guarda, facilitación, traslado, tenencia transporte de droga se efectuó sin contar con las competentes autorizaciones.

3°.- Que el fallo recurrido en diversos párrafos del considerando vigésimo sexto detalla la participación del acusado Carlos Álvarez Reza- alias “Carlos papa”.

Al respecto, incluso la defensa no desconoce que su representado fue sorprendido portando 5 kilos 600 gramos de cocaína clorhidrato a bordo de un bus



interprovincial el 11 de septiembre de 2019 a la altura del kilómetro 897 de la comuna de San Pablo.

Así, en el fallo se le sindicó entregando droga en varias ocasiones a Marina Maturana Martínez, lo que se estableció a través de escuchas telefónica, y declaraciones de funcionarios policiales; se indica que ésta tenía guardado el número telefónico del acusado, cuya identidad fue revelada a través de escuchas telefónicas, se señala por el testigo Krause que fue a través de estas escuchas telefónicas que se pudo estructurar el funcionamiento de la organización. Además, el testigo Hugo Castro Opazo corrobora lo señalado, indicado según el fallo, que el análisis de redes sociales, permitió determinar la participación del acusado, no en un hecho aislado, sino como parte de la organización delictiva.

Más adelante en el mismo considerando se consigna la declaración de Marina Maturana que da cuenta de que Carlos Álvarez trajo en más de una ocasión droga desde Santiago a Osorno, lo que coordinaba con Marina y con Hanner, quien enviaba un vehículo a buscar la droga.

Se menciona incluso el deseo de Marina Maturana de encargar otro envío con Carlos Álvarez que no se perfeccionó por estar este ebrio.

4°.- Que el análisis de este cúmulo de razonamientos que corresponde a una revisión de la prueba rendida, permite descartar desde ya la alegación de falta de razonamiento que formula la defensa, máxime si en el considerando vigésimo octavo del fallo, en un largo desarrollo, se explican en detalle, cuáles fueron los presupuestos fácticos que los jueces consideraron para tener por acreditados la figura del artículo 19 a) de la Ley 20.000.-

En el análisis en comento, se da cuenta de que se pudo apreciar en el actuar de los acusados, coordinación, distribución de funciones, rutas determinadas, con permanencia en el tiempo, la que siguió operando aun cuando sus principales operadores fueron descubiertos y detenidos.

5°.- Por lo expuesto, las alegaciones de la defensa, corresponden a una disconformidad con las conclusiones a las que arribaron los sentenciadores, sin que se entienda configurada la causal de nulidad por la que se recurre.

Que además, atendida la extensión de la pena contemplada para la infracción en abstracto, se estima que correspondía efectuar un mayor desarrollo por parte del recurrente, en un recurso de derecho estricto, a fin de explicar cómo lo alegado influiría sustancialmente en el fallo, razonamiento que no se observa en el presente arbitrio.

6° Que, la misma causal la defensa, además la alega respecto a la circunstancia minorante de responsabilidad del artículo 11 N°9 del Código Penal,



la que el tribunal desecha por las razones consignadas en el considerando trigésimo, que estima insuficientes. Funda su petición en expresiones contenidas en el fallo recurrido en cuanto se señala “Lo importante es la información obtenida de Carlos Álvarez y de Adlay, esos dos aportaron más a la investigación”.

El recurrente no da cuenta que dichas expresiones en este razonamiento de que esta información fueron obtenidas por medio de escuchas telefónicas, como lo menciona el fallo, por lo que el efecto de esas escuchas que permitieron entender cómo se organizaba la agrupación delictiva, no puede ser considerada una cooperación sustancial, ni en la más generosa de las interpretaciones, ya que no existió una voluntad de cooperar.

7°.- Que como ya ha sido considerado anteriormente por esta Corte, el mecanismo de impugnación reglamentado en el Título IV del Libro Tercero del Código Procesal Penal, es de carácter estricto y extraordinario , por lo que sólo procede por las causales y finalidad expresamente señaladas por la ley, no constituyendo una instancia diversa que permita revisar los hechos establecidos por el tribunal a quo, dado el principio de inmediación que está en la base estructural de un sistema oral , el cual exige una apreciación directa de las pruebas que se producen en el juicio por parte de los jueces que han de decidir la cuestión debatida, por lo que la revisión de lo resuelto por otro tribunal que no ha asistido al debate , y que sólo se informa de la prueba incorporada al juicio y de lo que en el mismo se ha actuado y debatido a través de actas o audios, priva a este *ad quem* de esa centralidad y directa relación con las partes y los elementos de prueba que se valoraron para formar la convicción del tribunal.

8°.- En este sentido, puede observarse de la lectura del fallo en cuestión, en los acápites mencionados, que éste se explicita el análisis que los sentenciadores hacen del conjunto de los elementos probatorios que sirvieron para el establecimiento de existencia de una agrupación delictual y la participación del acusado en la agrupación que da lugar a la configuración de la figura agravante de responsabilidad del artículo 19 letra A de la Ley 20.000., como así mismo, las razones que se tuvieron para desechar la solicitud de configuración en su favor de la minorante de responsabilidad del artículo 11 N°9 del Código Penal.

9°.- Por lo expuesto, estimando que las alegaciones de la defensa, no pueden ser atendidas, ya que en definitiva la falta que se reprocha no existe, siendo más bien las expresiones de la recurrente, manifestación de discrepancia con las conclusiones contenidas en el fallo, el presente recurso por la causal alegada de manera principal, en ninguna de sus hipótesis podrá ser acogido.



10°.- Que la defensa ha recurrido, de manera subsidiaria , alegando que en el pronunciamiento de la sentencia previamente individualizada, existiría una errónea aplicación del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000.

Al respecto, se analizaran los tres elementos que según el entender de la defensa no se configuran en la especie.

a.- Reunión de delincuentes destinado a cometer un ilícito; en este punto sostiene la defensa que no existe discusión alguna que Carlos Álvarez Reza concurre al llamado de una organización cuyo objetivo es el tráfico de droga al sur del país, sin embargo afirma que le cabe una actividad residual calificado incluso por los mismo funcionarios policiales como un burrero a honorarios cuya función es ser el trasportista, pero no teniendo mayor injerencia.

b.- Un determina estructura; indicando que Álvarez Reza no forma parte de la estructura armada de la organización, ya que su función es fácilmente reemplazable y así sucedió.

c.- Permanencia en el Tiempo; razonando que este elemento debe revisarse a la luz de una verdadera participación en una organización, debiendo determinar si la participación esporádica o eventual constituye una verdadera permanencia en el tiempo.

11.- Que las alegaciones que la defensa formula, para este punto, deben entenderse, en cuanto a la participación del acusado en dicha organización y no en relación a la existencia de la misma, la que en el fondo no refuta, llegando a reconocer que esta incluso sigue funcionando después de la detención del acusado.

El mismo reconocimiento de su existencia, se encuentra en la pretendida asignación a su representado de un rol menor y no directivo en la misma, fundando su aseveración en los dichos formulados por testigos en el juicio.

12.- En este punto conviene distinguir en la figura agravante contemplada en el artículo 19 de la ley 20.000., de la establecida en el artículo 16 del mismo texto legal, norma que sanciona la asociación ilícita, estructura de mayor grado de permanencia y jerarquización.

Es por lo mismo, respecto de esta última figura de asociación ilícita en que las alegaciones del acusado podrían tener cabida, ya que es en ella en que es posible entender la existencia de roles claramente diferenciados, que permitan explicar que algunos sujetos que participan en ella pueden incluso llegar a desconocer la amplitud y significancia de las operaciones que se les encomiendan.



En el presente caso, como bien razona el fallo recurrido, dicha estructura jerarquizada no se observa, sin dejar de desconocer que alguno de sus miembros tenían mayor injerencia en ella, por lo que, en la figura de la agrupación delictual, a diferencia de lo antes señalado, nos encontramos frente a una distribución de funciones relativamente laxa, en que se conoce claramente quienes participan, se consolida y se mantiene la relación, dándose por lo mismo los elementos que la defensa considera ausentes, en el actuar del conjunto de los condenados, conducta de la que no queda excluido Carlos Álvarez Reza, quien conocía las acciones de varios de sus partícipes, teniendo conocimiento de los envíos de droga, tanto en las fechas como en el tipo de transporte, habiendo sido sorprendido portando droga en una sola oportunidad, pero, como lo han declarado los coacusados y la policía que participó como testigos, hubo oportunidades anteriores en que viajó para concretar entregas coordinadas. Prueba de este conocimiento y participación es el hecho de que fueron las interceptaciones a su teléfono las que aportaron datos relevantes de la existencia de la agrupación.

Por las razones expuestas, estimando que se configuran, de acuerdo a la prueba rendida, debidamente analizada en el fallo en comento, todos los elementos de la figura agravante de responsabilidad contemplada en el artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, es necesario concluir que no ha habido una errada aplicación del derecho, el recurso de nulidad opuesto por la defensa del acusado Carlos Álvarez Reza, será rechazado.

II.-En cuanto al recurso de Nulidad interpuesto por Adlay Quiñones Castro e Israel Hernán Rivas Aspirilla.

13.- Que si bien originalmente se presentó el recurso, fundado en cinco causales, una de ellas fue reconducida por la Excelentísima Corte Suprema, por estimar que sus alegaciones formaban parte de las causales invocadas como subsidiarias por lo que sólo se hará referencia a éstas.

14.- Que alega la defensa infracción al artículo 374 letra f) indicando que, de la sola lectura de la acusación fiscal, comprendida dentro del auto de apertura, comparado con la sentencia en la parte pertinente, se observa que claramente existe una infracción a la coincidencia que debe existir entre la acusación y la sentencia. Arguye que el artículo 341 del Código Procesal Penal, establece la prohibición de que la sentencia condene por hechos no comprendidos en la acusación, en el procedimiento de ordinaria aplicación.

Continúa expresando que ninguno de los 6 hechos que se tuvo por acreditados, fue formulado como hechos independientes, ni en la formalización de la investigación ni en las acusaciones, razón por la cual el fallo adolece



inevitablemente del motivo absoluto de nulidad establecido en el artículo 374 f) del Código Procesal Penal. Si esta circunstancia de reiteración hubiera sido solicitada en su momento, al menos, la defensa podría en el juicio oral haber refutado dichas circunstancias, lo que no se pudo realizar dejando en la indefensión a mis representados. En ninguna parte de la acusación se solicitan penas por 6 hechos sino que solo se pide una pena por un hecho de tráfico entendiendo que todos los hechos de la acusación constituyen un delito de emprendimiento y por ningún motivo se supo por la defensa ni por sus representados que se trataba de una reiteración de hechos.-

15.- Que si bien de la simple lectura de fallo recurrido es posible observar que los sentenciadores han estructurado los hechos de manera diversa a lo señalado en la acusación fiscal, los hechos de la acusación fiscal, contenidos en el auto de apertura, no han sido modificados, por lo que la alegación del recurrente carece de sentido en este aspecto, pudiendo verificarse que la calificación del tribunal, respecto de los hechos asentados en juicio, puestos en conocimiento por parte de la fiscalía al través de la acusación, ha dado un orden , tanto espacial como temporal, que ha permitido dilucidar la participación de los acusados en los mismos.

Esa ha sido la labor de sistematización realizada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno, que ha permitió dar orden a los hechos constitutivos de tráfico, sin alteración de los mismos.

16.-Que al respecto se puede razonar además, que la alegación de reiteración que se formula por la defensa, no se ve reflejada en el fallo, ya que en ningún momento se utiliza esta expresión de manera explícita por los sentenciadores, sin dejar de observar, por cierto, que se imputa participación en tráficos de drogas en más de una ocasión. Sin embargo, la conjugación de esta circunstancia, con la determinación de la concurrencia de la agravante del artículo 19 letra a) de la ley 20.000., permite concluir que los sentenciadores sin concurrir una agravante distinta a la ya mencionada, aplicaron la agravante desde el *médium* de la pena posible de aplicar, según lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 20.000. , lo que corresponde a una interpretación de efecto de esta agravante, más beneficiosa para el acusado, ya que no se cuenta desde el máximo de la pena a aplicar.

Además, la forma en que ha sido determinada la pena, significa una diferenciación racional entre la gravedad del injusto, en comparación a quienes participaron en un solo delito, que no configura vulneración al marco legal, sino una apreciación racional del mayor daño producido a través de la conducta.



17°.- Por lo expuesto, la circunstancia alegada, esto es, la sanción como delitos reiterados no se expresa literalmente en el fallo, como tampoco se refleja en la pena impuesta, lo que permite concluir que no se configura la causal alegada, pues no se ha aplicado más agravantes que la explicitada en el fallo, ni se ha extendido la pena más allá de los marcos legales permitidos.

18.- Que la defensa de los acusados ha interpuesto como segunda causal subsidiaria la contemplada en el artículo 374 letra e) en relación al artículo 342 letra c) y al artículo 297, todos del Código Procesal Penal, la que se habría producido según la defensa, en que no se expresa de manera completa en el fallo recurrido el motivo de la aplicación de la agravante del artículo 19 letra a) de la Ley N° 20.000-, estimando que el tribunal deja de valorar elementos que podrían haber arribado a una conclusión diferente.

19°.- Al respecto se observa que el fallo en su considerando vigésimo octavo, señala que se considera configurada respecto de estos acusados la agravante por diversas situaciones fácticas, todas debidamente acreditadas.

Es así como se menciona cuál es el propósito que los unía, que no era otro que la perpetración de tráfico de drogas, que actuaban coordinadamente, desarrollando sus componentes diversas funciones, con rutas determinadas para la comercialización, atribuyendo específicamente a Adlay David Quiñonez, el traslado de droga desde Santiago a Puerto Montt, manteniendo contacto con Hanner Figueroa, y con Marina Maturana.

Por su parte, se sindicó a Israel Rivas Asprilla, como el cabecilla de la organización, quien coordinaba la distribución de funciones, explicitando el tribunal las operaciones en que participaron cada uno de ellos, y la funciones que realizaban en el considerando veinticinco, en el que se pueden leer los diversos hechos delictuales cometidos, todos concatenados por la participación de los acusados.

20.- Por lo expuesto, no se observa la falta de razonamiento que se reprocha, más bien se observa una disconformidad con las conclusiones a las que se han arribado, dificultad que no configura la causal de nulidad invocada.

21°.- Como tercera causal subsidiaria opone la del artículo 373 letra b) en relación con los artículos 1° de la Ley 20.000, 351 del Código Procesal Penal y 63 del Código Penal, lo que se habría producido al considerarse los hechos como autónomos e independientes, teniendo presente que el delito de tráfico es un delito de emprendimiento, lo que ha derivado en una equivocada aplicación de la pena a su defendidos.



22°.- Que se entiende que lo pretendido por la defensa es que se concluya que los hechos acreditados no pueden ser considerados como autónomos e independientes, cuestión que entiende se configura en la forma en que el tribunal ordenó o estructuro los hechos contenidos en la acusación, para que no se le aplique lo expresado en el artículo 351 del Código Procesal Penal, cuestión que en todo caso, no se observa e la especie, y teniendo presente que nos encontramos en la hipótesis prevista en el inciso final del artículo 63 del Código Penal.

23°.- Que la alegación de la causal de nulidad establecida en el artículo 373 letra b) implica la aceptación de los hechos consignados en la sentencia, por lo que su fundamentación, de la forma planteada por la defensa, haciendo alusión a una problemática en el establecimiento de los mismos, resulta impertinente, al pretender cualquier modificación respecto de ellos, por lo que no puede acogerse su pretensión en tal sentido.

Que, por lo expuesto, se estima que no se configura la infracción legal alegada.

24°.- Como cuarta causal subsidiaria alega la infracción al artículo 19 letra a) de la ley 20.000, en relación al artículo 63 del Código Penal, indicando que no se puede utilizar los mismos hechos , como lo realiza la sentencia , para sustentar la aplicación de la circunstancia agravante, ya que se configura un tratamiento vulneratorio de relevancia, desde que se utilizan infundadamente los mismos hechos, argumentos para por un lado, para condenar a los encartados y por otro para agravar desproporcionadamente la pena a cumplir, ya que con dicha modificatoria de responsabilidad penal, se provoca el aumento en un grado de la pena a aplicar.

25°.- Al respecto cabe tener presente que las alegaciones de la recurrente parecieran hacer entender que la sentencia no razonó sobre la existencia de la agravante del artículo 19 a) de la Ley 20.000.- bastándole es establecimiento de los hechos punibles para tenerla por acreditada.

26°.- Que se observa del fallo en cuestión, que los hechos acreditados por los que fueron sancionados los acusados, están explicitados en el considerando vigésimo quinto del fallo, mientras los razonamientos en torno a la configuración de la agravante por la cual se reclama, se encuentran contenidos en el considerando vigésimo octavo, el que expresa análisis distintos, en torno a presupuestos fácticos acreditados, que no forman parte del hecho típico del tráfico ilícito.



Así se da cuenta por los sentenciadores, de las conexiones existentes entre los diversos acusados, a fin de acreditar la existencia de una cierta estructura organizacional, elemento que no es presupuesto fáctico necesario del delito de tráfico ilícito de estupefacientes. Se hace alusión a la permanencia de dichas conexiones y la distribución de funciones de cada uno de los acusados, se hace alusión a una cierta estructura en esta organización, todos estos elementos que no necesariamente concurren en el delito de tráfico de drogas.

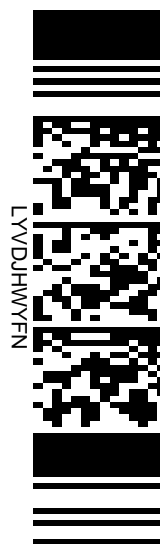
27°.- Por las razones expuestas, esto es, por no existir una infracción legal, a los normas citadas, el recurso interpuesto por los condenados Adlay David Quiñones Castro e Israel Hernán Rivas Asprilla será rechazado.

III.- En cuanto al recurso de nulidad interpuesto por el condenado Hanner Figueroa Guengue.

28°.- El recurrente fundamenta su petición de nulidad, en la causal contemplada en el artículo 374 letra e) en relación al artículo 342 letra c) y artículo 297, todos del Código Procesal Penal. Estima que en el hecho N°1 consignado en el fallo, ha condenado a su representado sólo por haberlo encontrado durmiendo en el domicilio del señor Palma, cuando el blanco investigativo era una tercera persona. Se estima que en el considerando vigésimo quinto, al analizar la prueba se ha infringido el principio del tercero excluido y la falta de razón suficiente. Expresa que nada se dice de la planta de metro y medio que se encuentra en dicha casa.

En cuanto al hecho dos y tres, señala que se identifica a su representado como el tal “Martín” con el cual la acusada Maturana coordinaba la distribución de droga en el penal de Osorno, considera que el tribunal o abordó suficientemente esta situación.

29°.- En relación a la primera alegación, referente al hecho N°1, la defensa omite señalar, que en el interior del dormitorio en que pernoctaba el acusado, se encontró una caja contenedora de 324 gramos brutos de cannabis, sin contar con las competentes autorizaciones. Se omite además señalar que la sentencia en el mismo considerando vigésimo quinto señala que los hechos por los cuales se condena al acusado se acreditaron por el atestado del funcionario policial Claudio Martínez Lizama, que ingresó en virtud de una orden de ingreso y registro al domicilio donde estaba Hanner Figueroa, que se acompañaron fotografías de los hechos al juicio indicándose en la sentencia que se pudo apreciar la habitación donde se encontraba el acusado y la caja contenedora, que según se señaló por el funcionario policial estaba sobre un mueble a los pies de la cama donde el acusado dormía .



30°.- Que lo anterior constituye un análisis detallado del hallazgo y las condiciones del mismo, del hecho de ser en la habitación del acusado y a la vista en donde estaba la droga, por lo que las alegaciones de la defensa, no tiene fuerza en este punto para configurar la casual alegada.

31°.- Que en relación a las alegaciones referidas a los hechos dos y tres, en que también se imputa participación al acusado Hanner Andrés Figueroa Guengue, quien se encontraba recluido en el centro penitenciario de la ciudad de Osorno en esa época, el fallo recurrido expresa que la actuación del acusado formó parte de una operación concertada con Marina Fernanda Maturana Martínez, hechos que fueron acreditados mediante escuchas telefónicas , realizadas al teléfono de marina Maturana, conectada a una antena que se encuentra a 200 metros del centro penitenciario, constando además que Marina Maturana visitaba a Hanner Figueroa Guenge en la cárcel, de acuerdo a los enrolamientos registrados.

Que el fallo para ser más claro expresa que el uso del nombre Martín para referirse al acusado Hanner Figueroa Guengue fue reconocido en su declaración en juicio por la acusada marina Maturana, lo que quedó en evidencia al incorporar las interceptaciones telefónicas en juicio.

32°.- Que resulta entonces que los razonamiento antes referidos, contenidos en la sentencia, satisfacen los requerimientos de las normas invocadas como vulneradas, pudiendo apreciarse de éstos que aparecen suficientemente justificadas los presupuestos fácticos para atribuir participación culpable al acusado en los ilícitos por los cuales se le ha condenado.

33°.- Por lo expuesto, las alegaciones del recurrente, constituyen más bien, una manifestación de disconformidad con lo concluido por los sentenciadores, disconformidad que no configura la causa invocada.

IV.-En cuanto al recurso de nulidad interpuesto por la condenada Jennifer Esther Salazar.

34°.- Que el recurrente funda su alegación como causal principal, en la contemplada en el artículo 374 letra a) del Código Procesal Penal, en relación al artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales, esto es, el haber sido dictada la sentencia por tribunal incompetente.

Al respecto señala que como se observa de los hechos por los cuales se ha condenado a su representada, éstos ocurren en Puerto Montt y por ende fuera de la esfera de la competencia del Tribunal oral en lo Penal de Osorno.

35°.- Que la sentencia reconoce la participación de la acusada Jennifer Esther Salazar en un delito de tráfico cometido el 7 de diciembre de 2019, dando



cuenta además en su considerando vigésimo octavo, que le corresponde participación en una agrupación delictual en los términos del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000., participando en la coordinación del transporte de la droga.

Por lo expuesto, confunde la defensa el lugar en que ha sido detenida la acusada con aquel en que tuvo principio de ejecución el delito que se le imputa, razón por la cual, su reclamación será rechazada. Lo anterior, sin perjuicio que, desde el punto de vista procesal, y conforme lo previene el artículo 74 del Código Procesal Penal, la oportunidad procesal para plantear cualquier conflicto de competencia, precluyó en la etapa correspondiente, manifestando el recurrente haber planteado la cuestión de competencia en la audiencia de preparación de juicio oral, resolviéndose en dicha oportunidad el rechazo de la misma, no pudiendo reiterarse dicha solicitud ni acogerse una alegación en tal sentido, por estar expresamente prohibido por Ley.

36°.- Como causal subsidiaria plantea la prevista en el artículo 374 letra e) en relación al artículo 342 letra c) y 297, todos del Código Procesal Penal, expresando que el tribunal establece la participación de su representada por la sola existencia de tres escuchas telefónicas el día anterior de la detención. Expresa que tampoco existe argumentación para desechar las alegaciones de la defensa en cuanto al estándar de prueba y el cuestionamiento a los dichos de los testigos y que no se puede establecer la forma en que su representada recibía instrucciones de Israel Rivas Asprilla para velar por el transporte que efectuaban tanto Edith Santana Arias de Sosa como Jhonathan Angulo hacia Puerto Natales y Punta Arenas.

37°.- Que para justificar su alegación, el propio recurrente hace alusión a escuchas telefónicas en que se describe la conversación entre la acusada Jennifer Salazar y el acusado Israel Rivas Asprilla, mediante las cuales, recibe instrucciones para coordinarse con Edith Santana Arias y Jonathan Angulo en el viaje que pensaban hacer desde la ciudad de Puerto Montt con destino a Puerto Natales y Punta Arenas.

Describe asimismo, lo que se le preguntó al testigo Javier Ignacio Krause en relación a las escuchas telefónicas.

Todas estas conversaciones han sido estampadas en el fallo cuestionado, lo que ha permitido a los sentenciadores arribar a la conclusión de la participación de la acusada en el ilícito por el cual se le condena.

38°.- Que el recurrente lo que pretende es que se entienda que falta un proceso lógico en el cual a partir de algún elemento probatorio conocido y



aportado al juicio se infiera otro desconocido, no bastándole la explicitación del contenido de las probanzas vertido en juicio.

Obvia decir el recurrente que tal como lo menciona la sentencia respecto del hecho 5, la acusada declara en juicio reconociendo esta conversación con Israel Rivas Asprilla, quien le habrían propuesto llevar droga el día 6 de diciembre de 2019, y por eso consulta sobre los controles o revisiones.

Por lo expuesto, la alegación de la defensa es una disconformidad respecto de lo resuelto, que no tiene sustento en las pruebas aportadas ni tampoco en la forma en que el fallo explicita lo que se dio a conocer en el juicio, por lo que esta disconformidad planteada no configura la causal de nulidad invocada.

Teniendo en consideración los razonamientos precedentes, el recurso de nulidad de la sentenciada Jennifer Esther Salazar, será rechazado.

V.-En cuanto al recurso de nulidad interpuesto en favor de Edith Nicaulys Santana Arias de Sosa y Jonathan Angulo Vente.

39°.- La recurrente alega como causal principal de su recurso, la contemplada en el artículo 374 letra a) del Código Procesal Penal, por estimar que ésta ha sido dictada por tribunal incompetente, ya que el delito por el cual se ha condenado a sus representados ha sido cometido en la ciudad de Puerto Montt.

Que tal como ya se ha hecho mención en el numeral 33° de este fallo, la recurrente confunde el lugar de detención con aquel en que se dio principio a la ejecución del miso, debiendo recordar que han sido detenidos los acusados, junto con Jennifer Esther Salazar, quien recibía instrucciones respecto del transporte de la droga, hasta finalmente abordar un barco con destino a Puerto Natales, el día 7 de diciembre de 2019.

Asimismo, estas alegaciones de falta de competencia deberán ser desestimadas al tenor de lo dispuesto en el artículo 74 del Código Procesal Penal, que imperativamente prohíbe alegaciones de esta naturaleza en la etapa de juicio oral.

40°.- Como primera causal subsidiaria, alega la contenida en el artículo 374 letra e) en relación con lo dispuesto en el artículo 342 letra c) y artículo 297, todos del Código Procesal Penal, fundado en que no se advierte que hubo proposición de recalificación de los hechos de la acusación y que la defensa alegó la incompetencia del tribunal.

Se observa al respecto que la defensa insiste en expresar que se han recalificado los hechos, cuando en realidad se ha acusado a sus representados como autores de un solo delito de tráfico, por lo que no se observa ni recalificación ni perjuicio que se pueda alegar al respecto, constando a además que a su



respecto tampoco se ha tenido por configurada la agravante del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, habiéndosele aplicado la pena en su mínimo legal, razón por la cual por lo que no se observa perjuicio que haya afectado a los acusados en el sentido expuesto.

En relación a la alegación sobre incompetencia, como ya se ha señalado, ésta no es propia del juicio oral al tenor de lo dispuesto en el artículo 74 del Código Procesal Penal, y su omisión, si es que la hubo, no influye sustancialmente en lo dispositivo del mismo.

41°.- Se alega por la defensa como segunda causal subsidiaria, el vicio de nulidad consagrado en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto es, en haber incurrido el fallo en una errónea aplicación del derecho, en el caso específico por no haber reconocido la concurrencia de la minorante de responsabilidad contemplada en el artículo 11 N°9 del Código Penal.

Expresa que la sentencia rechaza la concurrencia respecto de sus representados de la atenuante mencionada, porque entiende que la declaración de ellos en sede judicial, no configura la atenuante ya que los medios de prueba aportados por el persecutor fueron suficientes para lograr convicción del tribunal de su participación culpable.

42°.- Que el artículo 373, letra b) del Código Procesal Penal dispone que procederá la nulidad del juicio y de la sentencia cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, y en sentencia dictada en Rol 2095-2011, con fecha 2 de mayo de 2011, nuestra Excelentísima Corte Suprema, explicando el significado de dicha causal, aludiendo a las directrices fijadas por la doctrina y jurisprudencia, ha precisado que la misma “concorre únicamente en los siguientes casos: a) cuando existe una contravención formal del texto de la ley, es decir cuando el juzgador vulnera de manera palmaria y evidente, el texto legal; b) cuando se vulnera el verdadero sentido y alcance de una norma jurídica que sirvió de base y fundamento para la dictación de una sentencia; y c) cuando existe una falsa aplicación de la ley, situación que se verifica cuando el juzgador deja de aplicar una norma jurídica, cuando resulta realmente pertinente su aplicación”.

43°.- Que, para resolver respecto a la causal invocada, no se puede dejar de considerar que el recurso de nulidad es de carácter estricto y extraordinario, “lo que impide que el recurrente pueda obviar discrecionalmente la causal específica contemplada en la ley para el defecto o vicio en cuestión, echando mano a una causal más amplia y genérica prevista en el mismo texto” (Sentencia Excma. Corte Suprema en Rol N° 17.014-15, diecisiete de diciembre de dos mil quince).



44°.- Que, además, cuando se invoca la causal de errónea aplicación del derecho con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, como aquí sucede, el cuestionamiento únicamente debe dirigirse al contenido jurídico de la sentencia, sin que puedan, mediante esta causal, contrariarse los hechos asentados en el fallo, lo que implica que se aceptan como ciertos, constituyendo ellos el límite y marco en torno al cual quien recurre ha de desplegar sus argumentaciones, a fin de que el tribunal *ad quem* verifique si efectivamente la sentencia del a quo ha incurrido en una contravención formal del texto de la ley, en una vulneración del verdadero sentido y alcance de una norma jurídica que sirvió de base y fundamento para la dictación de la misma o si ha existido una falsa aplicación de la ley.

45°.- Que de la forma en que está planteada la nulidad por la defensa de Edith Nicaulys Santa Arias de Sosa y Jonathan Angulo Vente, es posible observar que lo reprochado es la valoración realizada por el tribunal sobre la suficiencia de la declaración de sus representados, cuestión valorativa que no configura la infracción alegada.

Que además de lo expuesto, la sentencia da razones para adoptar la decisión, que forman parte de su actuar discrecional y en el presente caso, no aparece como una decisión irracional y antojadiza, que torne arbitraria la decisión, toda vez que se comparte la apreciación formulada por los jueces *a quo* en cuanto a estimar que si se excluye hipotéticamente la declaración de los acusados, la decisión de imputar participación culpable en el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, podía ser justificada a partir del análisis de la demás prueba rendida, teniendo especialmente presente que fueron detenidos , después de ser seguidos a raíz de escuchas telefónicas que daban cuenta de su ubicación y posteriormente fueron encontrados y detenidos portando droga en grandes cantidades.

En razón de lo considerado, no se observa la errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, que la recurrente ha alegado, invocando la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal.

Por las razones expuestas, los recursos de nulidad de los abogados de los acusados recurrentes serán desestimados.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 372 y 384 del Código Procesal Penal, se **RECHAZAN** los recursos interpuestos por las defensas de los imputados Carlos Arturo Álvarez Reza, Adlay David Quiñonez Castro, Israel Hernán Rivas Asprilla, Hanner Figueroa Guengue,



Jennifer Esther Salazar, Edith Nicaulys Santana Arias de Sosa y Jonathan Angulo Vente, por lo que no es nula la sentencia de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictada en causa RUC 1900853211-k, que corresponden a la causa RIT 42- 2020 del Tribunal Oral en lo Penal de Osorno, ingresada en esta Corte con el ROL N° 40– 2021.-

Regístrese y comuníquese.

Redactada por el Ministro Sr. Mario Julio Kompatzki Contreras.

Rol 40 – 2021 PEN.



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valdivia integrada por Ministras (os) María Elena Llanos M., quien no obstante haber concurrido al acuerdo del fallo no firma por encontrarse con permiso de conformidad al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales, Mario Julio Kompatzki C. y Ministro Juan Ignacio Correa R. Valdivia, siete de mayo de dos mil veintiuno.

En Valdivia, a siete de mayo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

